

EXPEDIENTE: 100-061074

FECHA DE ENTRADA EN LA SECRETARÍA GENERAL: 29 de septiembre del 2021

D^o. [REDACTED] ha presentado solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

“En virtud de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Gobierno de España, les solicito la siguiente información:

- *Coste completo del viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su comitiva a Estados Unidos durante el mes de julio de 2021. Indicándose los gastos de alojamiento, gastos de desplazamiento, gastos en comidas, dietas y otros gastos para cada una de las personas.*
- *La relación de todas y cada una de las personas que han acompañado al presidente en su viaje. Indicándose nombre, apellidos y cargo de los miembros de la comitiva, así como el de los periodistas acreditados que han participado en el viaje.*
- *Coste completo del viaje del presidente y la delegación española a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (EEUU) en el mes de septiembre de este año. Indicándose los gastos de alojamiento, gastos de desplazamiento, gastos en comidas, dietas y otros gastos para cada una de las personas.*
- *La relación de todas y cada una de las personas que han formado parte de la delegación española. Indicándose nombre, apellidos y cargo de los miembros de la comitiva, así como el de los periodistas acreditados que han participado en el viaje.*

Les recuerdo que disponen de un plazo máximo de un mes para remitir dicha información.”

FUNDAMENTACIÓN

El artículo 5.1.d) del Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, atribuye al **Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica** el ejercicio de las funciones que la persona titular de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno le atribuya en materia de transparencia.

A su vez, se consideran **información pública**, según el artículo 13 de la Ley 19/2013, los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley o que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, incurrirán en causa de inadmisión aquellas solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una **acción previa de reelaboración**.

El artículo 14.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre determina que el derecho de acceso podrá ser limitado, entre otras causas, por suponer un perjuicio para la **seguridad nacional**.

En consecuencia, la Directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno,

RESUELVE

Inadmitir el acceso a la información solicitada respecto de los costes ocasionados con motivo de los viajes del Presidente del Gobierno a Estados Unidos que tuvieron lugar en los meses de julio y septiembre.

Denegar el acceso a la información solicitada respecto de la delegación o acompañantes del Presidente del Gobierno en los viajes a Estados Unidos que tuvieron lugar en los meses de julio y septiembre.

Respecto de la información requerida sobre los gastos de los viajes del Presidente del Gobierno a Estados Unidos, en la Presidencia del Gobierno, los gastos que pudieran generarse con ocasión de un viaje se atienden mediante imputación, según corresponda por su naturaleza, a diferentes subconceptos del “Capítulo 1: Gastos de Personal” o al “Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes o servicios”.

En consecuencia, no es posible individualizar el importe que corresponda a los gastos de los viajes del Presidente del Gobierno dentro del gasto total que se agrupa en cada subconcepto, sin que ello supusiera reelaborar nuevamente toda la información contable y, además, hacerlo paralelamente en dos soportes diferentes, el oficial que responde a los requisitos de información que demandan los órganos de control presupuestario, y uno propio que permitiera atender demandas de información particulares.

En lo que refiere a la información solicitada sobre los acompañantes del Presidente del Gobierno durante ambos viajes a Estados Unidos, informamos de que no cabe facilitar dicha información al tratarse de materia clasificada en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978 de 7 de

octubre, que refiere tanto a los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como a los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, a los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares.

Todo ello avalado por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional de fecha 23 de octubre de 2017, donde señala en su fallo que “La información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido clasificados como materia clasificada”, y por el propio Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, en el fundamento jurídico 7º de su resolución del 15 de febrero de 2016, en la que indicaba que “Dicha información no incluirá datos de vuelos cuya información haya sido clasificada antes de ser proporcionada al Ejército del aire por venir referida a la Presidencia del Gobierno y/o Casa Real”.

Por todo lo anterior, no pueden facilitarse los datos referidos a la delegación o “acompañantes” del Presidente del Gobierno por tratarse de materia clasificada e incurrir, por tanto, en uno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que recoge las causas de denegación de la información.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.

En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.

EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA
DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

